



**Francisco Miranda
Hamburger**
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

CARTA DEL DIRECTOR

Más allá de un pacto

La firma de un pacto para la ‘transición energética justa’, como parte de la gira del Gobierno Nacional en La Guajira, así como el anuncio del cierre de las 235 consultas previas de la línea de interconexión Colectora, constituyen buenas noticias en medio de un estancamiento de proyectos renovables en el departamento peninsular. Tanto la búsqueda de un mejor relacionamiento entre empresas y comunidades étnicas como el avance de una iniciativa estratégica ya peligrosamente retrasada son bienvenidas y necesarias.

No obstante, la marcha de la política de transición energética en Colombia requiere hoy en día mucho más que una declaración de intenciones no vinculantes entre el Estado, los privados y los indígenas wayú. El tiempo para bienintencionados discursos alrededor del poten-

cial en generación energética renovable y no convencional en La Guajira y en el resto del territorio nacional debe dar paso al momento de los hechos tangibles y las acciones que aterricen las ilusiones y los buenos deseos.

Sin desconocer el logro en el proceso de Colectora, aún faltan decisiones específicas para acelerar el desarrollo de la veintena de proyectos eólicos y solares en La Guajira y otras decenas más en el resto del país. De acuerdo a un informe de SER Colombia, gremio de las energías renovables, dos de cada tres iniciativas programadas para los próximos dos años están atrapadas por permisos y trámites. Ni hablar de las dificultades que las empresas están enfrentando en términos de conflictividad social y de licenciamiento ambiental.

Uno de los resultados inmediatos de esta visita del presidente Gustavo Petro y el alto gobierno a La Guajira



La transición energética no solo requiere relaciones con comunidades sino también una ruta clara, agilizar proyectos, señales al mercado y a la demanda”.

debe ser el destrabe de una buena parte de los 2.400 megavatios que hoy esperan superar esos obstáculos en el relacionamiento con las comunidades wayú y las licen-

cias. En otras palabras, el horizonte para las energías eólica y solar en este departamento no está completamente despejado. A la aplicación directa del pacto suscrito y su traducción en acuerdos entre las empresas y los indígenas se le debe sumar una gerencia eficaz del resto de proyectos con miras a reducir los tiempos de sus entradas en operación.

Sin embargo, la política de transición energética en Colombia no sólo requiere un relacionamiento más ágil y productivo entre el Estado, el sector privado y las comunidades impactadas. No para de crecer la urgencia de contar con una hoja de ruta clara y definida desde el Gobierno que identifique el camino que deben tomar los distintos actores de esta política para alcanzar las ambiciosas metas en términos de descarbonización y de transformación económica y productiva del país.

La distancia entre los discursos sobre transición energética del Gobierno y las cuestiones que siguen pendientes en la estrategia de encaminar la economía a un escenario de bajas emisiones sigue ampliándose. El recientemente publicado ranquin del Foro Económico Mundial (WEF) sobre transición energética mostró una caída anual de diez posiciones para Colombia, reflejando la pérdida de liderazgo regional en este tema.

El tiempo de los discursos y las buenas intenciones pasó y al Gobierno le toca tomar decisiones y decidir cursos de acción que van desde las normatividades a la agilización de procesos de consulta y licenciamiento ambiental pasando por incentivos coherentes en materia fiscal al sector. La política de transición implica un camino simultáneo de cambios en los marcos normativos, señales evidentes a los mercados y a la demanda energética, estrategias claras sobre ganadores y perdedores del proceso, cierres operativos y financieros de los proyectos de renovables, entre otros.